

HONDURAS SE DESPLOMA*

J. Mark Ruhl

J. Mark Ruhl es profesor de la cátedra Glenn y Mary Todd de Ciencia Política en Dickinson College, Carlisle, Pensilvania. Ha escrito extensamente sobre la democratización y las relaciones cívico-militares en América Latina. Su ensayo “Curbing Central America’s Militaries” apareció en el ejemplar de julio de 2004 de la revista Journal of Democracy.

En la madrugada del 28 de junio de 2009, un grupo de soldados hondureños armados arrestaron al presidente Manuel Zelaya en su residencia oficial y lo subieron en un avión rumbo a Costa Rica. A mediodía, la onda expansiva desencadenada por esta acción se hacía sentir en toda América Latina. El primer golpe militar exitoso¹ de la región desde que el Ejército haitiano depusiera al presidente Jean Bertrand Aristide en 1991 dejó atónitos a los analistas políticos, que habían dedicado las dos décadas anteriores a observar cómo las fuerzas armadas de la región marchaban firmemente hacia los márgenes de la política. La serie de siete elecciones democráticas consecutivas de Honduras y la aparente subordinación del Ejército hondureño al control civil desde fines de la década de 1990 hicieron que la destitución de Zelaya —que condujo a la eliminación del país de la lista de “democracias electorales” elaborada por Freedom House— fuera mucho más sorprendente.

Sin embargo, este no fue el golpe militar de nuestros padres. A diferencia de los oficiales de alto rango que pertenecían a la vieja escuela, cuya afición a derribar gobiernos había invadido América Latina en los años sesenta y setenta, los generales hondureños no estaban actuando por propia iniciativa al derrocar a Zelaya. En cambio, contaban con una orden judicial del más alto tribunal de la nación y un apoyo casi unánime del Congreso Nacional. En lugar de anunciar

* Publicado originalmente como “Honduras unravels”. *Journal of Democracy* Vol. 21, Nº 2, abril 2010:93-107 © 2010 National Endowment por Democracy and The Johns Hopkins University Press.

que los comandantes de más alto nivel formarían una junta, las fuerzas armadas traspasaron inmediatamente el poder a un gobierno interino de carácter civil encabezado por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, quien ocupaba el puesto siguiente en el orden de sucesión a la presidencia prescrito por la Constitución.

A pesar de que los oficiales militares conservadores desaprobaban el giro hacia la izquierda del presidente Zelaya después de 2007 y su alianza con el socialista venezolano Hugo Chávez, las fuerzas armadas se habían transformado en actores periféricos de la política hondureña y no habían mostrado ninguna inclinación a participar en el conflicto entre Zelaya y las élites tradicionales del país. No obstante, la decisión del presidente Zelaya de celebrar un referendo sobre si convocar o no a una asamblea constituyente, a pesar de la oposición del fiscal general, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), desató una crisis constitucional durante la cual tanto él como sus adversarios intentaron conseguir el respaldo del Ejército. Este colapso de la política democrática civil puso a las fuerzas armadas nuevamente en el centro de la escena política y las obligó a tomar partido.

Las manifestaciones callejeras y otras protestas organizadas por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR) —una alianza de sindicatos, grupos campesinos y organizaciones populares de izquierda— nunca fueron lo suficientemente disruptivas como para expulsar al gobierno derechista de Micheletti durante los meses posteriores al golpe. Una coalición anti Zelaya formada principalmente por los dos partidos tradicionales, el sector empresarial privado y las fuerzas de seguridad resultó ser mucho más fuerte. La esperanza de Zelaya de que una división dentro de las fuerzas armadas cambiara completamente el escenario nunca se hizo realidad. Asimismo, la amplia condena internacional del régimen interino y la suspensión de la ayuda económica tampoco consiguieron restituir a Zelaya, y el actor externo más poderoso, Estados Unidos, vaciló en su compromiso con el presidente destituido. En noviembre de 2009, se celebraron elecciones presidenciales y del Congreso de acuerdo a la programación habitual a pesar del llamado de Zelaya a boicotearlas. Aunque estas elecciones fueron fiscalizadas por el gobierno de Micheletti, los dos partidos principales habían designado a su candidato mucho antes del golpe, y al propio Zelaya le estaba constitucionalmente prohibido presentarse a un segundo período. A pesar de sus fallas, las elecciones de noviembre produjeron un resultado lo suficientemente creíble como para permitir al candidato ganador del Partido Nacional, el hacendado conservador Porfirio Lobo Sosa, asumir el poder a fines de enero de 2010 con la aprobación de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos.

El gobierno de Lobo Sosa conseguirá gradualmente una aceptación internacional más amplia, pero el panorama de la democracia en Honduras es incierto. Las élites políticas civiles en competencia han

demostrado que están excesivamente preparadas para romper las reglas democráticas en una crisis, y sus acciones han repolitizado el Ejército. Además, las encuestas de opinión de la última década mostraron que los hondureños comunes están mucho menos comprometidos con las instituciones democráticas que la mayoría de los otros latinoamericanos, y están más dispuestos a ser testigos de cómo sus líderes políticos emplean medios no democráticos. A fines de 2009, solo dos pueblos latinoamericanos registraban mayores niveles de insatisfacción con la democracia que Honduras.² Más de un cuarto de siglo de política democrática ha producido escasos beneficios tangibles para los hondureños. La nación sigue siendo una de las más pobres y desiguales de la región; más de dos tercios de las personas aún viven bajo el umbral de pobreza. Además, se ubica entre los países latinoamericanos más corruptos y asolados por el delito.

Honduras tiene 7,8 millones de habitantes y una superficie similar al tamaño de Ohio, y alrededor de la mitad de los hondureños viven en zonas rurales donde es común el analfabetismo. La mayor parte de la otra mitad reside en la capital, Tegucigalpa, ubicada en las montañas del sur, o en San Pedro Sula, el centro comercial e industrial del norte del país, en la costa del Caribe. La precaria economía —el PIB per cápita es de 4.400 dólares estadounidenses en paridad de poder adquisitivo— depende de las remesas de los más de un millón de hondureños que viven en el extranjero, varios en Estados Unidos, y de las exportaciones de bananas y café, además de textiles del sector manufacturero maquilador.

Un legado autoritario

Durante la mayor parte de su historia, Honduras fue gobernada en forma autoritaria por dirigentes políticos patrimoniales en competencia, asociados con uno de los dos partidos políticos tradicionales. Las fuerzas armadas profesionales fueron fundadas recién en la década de 1940 por el dictador civil Tiburcio Carías, quien gobernó desde 1932 hasta 1949. A mediados de los años cincuenta, el Ejército se había convertido en un árbitro entre los políticos del Partido Liberal y los del Partido Nacional, enemigos inveterados; durante la década siguiente, llegó a ser el actor político dominante. Excepto por un breve intervalo civil en 1971, los oficiales del Ejército ocuparon el palacio presidencial entre 1963 y 1982. Bajo la presión de Estados Unidos, el Ejército inició un proceso de democratización controlada mediante la organización de elecciones para una asamblea constituyente en 1980, y de elecciones generales el año siguiente. El primer presidente elegido democráticamente bajo la nueva Constitución, Roberto Suazo Córdova, del Partido Liberal, hizo un mal uso de su influencia sobre la Corte Suprema de Justicia y el TSE a fin de manipular el proceso electoral con la esperanza de permanecer en el poder más allá del período único de cuatro años que

estaba permitido. Sin embargo, la oposición generalizada y la mediación del Ejército obligaron a Suazo a desistir de su iniciativa, y en los años siguientes se institucionalizó un sistema de elecciones democráticas sistemáticas. Los políticos civiles de Honduras gradualmente aprendieron a mantener sus tradicionales batallas por la influencia política dentro de límites democráticos. Entre 1981 y 2005 tuvieron lugar en orden siete elecciones libres y justas en términos generales, y se produjeron cuatro traspasos democráticos del poder entre los partidos tradicionales: en 1989, 1993, 2001 y 2005.

A pesar de este progreso electoral, las fuerzas armadas hondureñas continuaron siendo dominantes a lo largo de la década de 1980 y hasta bien entrada la siguiente.³ Estados Unidos fortaleció el Ejército como un recurso estratégico clave en la guerra contra los movimientos revolucionarios de izquierda de los vecinos Nicaragua, El Salvador y Guatemala, e ignoró sus abusos a los derechos humanos y su corrupción. El drástico aumento de la ayuda militar estadounidense permitió a las fuerzas armadas expandirse hasta un contingente de 26.000 soldados. El Ejército aplastó a los pequeños movimientos de la guerrilla marxista que estaban activos en el país, mientras que las fuerzas contrarrevolucionarias de la Contra nicaragüense establecidas en Honduras, financiadas por Estados Unidos, dirigieron sus ataques más allá de las fronteras. En este contexto de Guerra Fría, el sector privado hondureño y la mayoría de la clase política partidista se alió con las fuerzas armadas.

El Ejército no empezó a perder influencia sino hasta que la cruel versión local de la Guerra Fría en Centroamérica llegó a su fin, y los aliados externos e internos de las fuerzas armadas ya no necesitaban protección contra las amenazas revolucionarias. A comienzos de los años noventa, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa cambió de orientación y se unió con organizaciones populares de izquierda y algunos grupos empresariales en una amplia coalición que convenció a los políticos civiles de desafiar a las fuerzas armadas. Los presidentes liberales Carlos Roberto Reina (1994-1998) y Carlos Flores (1998-2002) redujeron el Ejército en más de la mitad y le quitaron la mayor parte de sus poderes y prerrogativas, por ejemplo, perdió el control sobre la Policía y el lucrativo sistema nacional de telecomunicaciones. Además, la abolición del servicio militar obligatorio compelió al Ejército a desistir de sus repudiados métodos de reclutamiento forzado, y una significativa reforma constitucional de 1999 estableció legalmente la supremacía civil sobre el Ejército por primera vez desde la década de 1950. Más adelante en ese mismo año, el presidente Flores exhibió esta reciente autoridad destituyendo al jefe de las fuerzas armadas y a la mayor parte de la jerarquía superior cuando las riñas internas sobre asuntos del personal provocaron una disputa con el nuevo Ministro de Defensa, un civil. Luego, las relaciones cívico-militares siguieron su curso sin incidentes hasta 2009.

Democratización *sin* legitimidad

En el año 2000, Honduras había cumplido con los requisitos mínimos de la democracia de procedimiento. Las élites políticas civiles habían accedido a competir dentro de las reglas democráticas, y el reducido Ejército había aceptado su posición subordinada. No obstante, el nuevo sistema democrático no ganó legitimidad a los ojos de los hondureños comunes. En vez de enfrentar las necesidades de una de las poblaciones más marginadas de América Latina, los políticos hondureños se concentraban en la pelea tradicional por la chamba (puestos de influencia) y el poder. La malversación y el soborno eran generalizados. Año a año, Transparencia Internacional (TI) clasificaba a los funcionarios públicos hondureños entre las élites gobernantes más corruptas de América Latina. El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2009, elaborado por esta institución, reveló que en Honduras la corrupción era “desenfrenada” y situó al país entre los cinco más corruptos de la región. Los programas económicos neoliberales adoptados por los dos partidos tradicionales produjeron apreciables tasas de crecimiento del PIB per cápita, pero la mayoría de clase baja recibió escasos beneficios materiales. La tasa de pobreza permanecía alta, y muchos hondureños emigraron a Estados Unidos en busca de trabajo.

Además, los gobiernos hondureños demostraron ser incapaces de controlar el aumento desmesurado de la tasa de delincuencia. Los asaltos, robos de autos, atracos de bancos y secuestros aumentaron considerablemente desde comienzos de la década de 1990, y el país alcanzó una de las tasas de homicidio más altas del mundo con 53 asesinatos por cada 100.000 residentes en 2008. Las pandillas delictivas de jóvenes Mara Salvatrucha y Calle 18 reclutaron a decenas de miles de jóvenes hondureños. Además, Honduras llegó a ser cada vez más importante en el transporte de estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos. Aproximadamente una de cada tres familias hondureñas relata hoy en la encuesta Latinobarómetro que algún miembro de la familia fue víctima de la delincuencia callejera en algún momento durante el año pasado. Por otra parte, los grandes traficantes de droga operan impunemente. Un ex jefe de seguridad estimó que los carteles de droga mexicanos han corrompido a la mitad de las fuerzas policiales hondureñas. El presidente Ricardo Maduro (2002-2006), quien había perdido a un hijo en un rapto fallido, sí atacó el problema de las pandillas con seriedad, pero sus políticas de tolerancia cero no lograron controlar la delincuencia.

Descontentos con los gobiernos crónicamente deficientes, los hondureños encuestados por Latinobarómetro mostraron niveles más altos de insatisfacción con la democracia que casi cualquier otro país latinoamericano. El año anterior al golpe, solo el 24% de los hondureños expresaban satisfacción con la democracia, y solo el 44% señalaba que prefería la democracia a cualquier otro tipo de gobierno. Únicamente

dos países latinoamericanos, Guatemala y México, registraron una preferencia menor por la democracia. Para cuando el candidato del Partido Liberal, Manuel Zelaya, fue elegido presidente en 2005, la mayoría de los hondureños ya estaban hastiados de los políticos civiles de ambos partidos tradicionales. El sentido casi hereditario de afiliación partidaria que por generaciones los líderes del Partido Liberal y el Partido Nacional esperaban que los votantes observaran se estaba desgastando rápidamente. Entre 2001 y 2008, el porcentaje de hondureños que rehusaron identificarse con un partido aumentó en forma considerable desde un 15% hasta un 55%, y el Ejército se convirtió en la institución estatal más respetada.⁴

Los hondureños recurrían cada vez más a la acción directa para ejercer presión sobre las élites políticas. Tanto los sindicatos, como los grupos campesinos, los habitantes de barrios marginales y las comunidades indígenas utilizaban barricadas, marchas en Tegucigalpa y otras actividades de protesta para atraer la atención a sus demandas de ayuda por parte del gobierno. La encuesta Barómetro de las Américas (LAPOP 2008) reveló que los hondureños estaban mucho más dispuestos que otros centroamericanos a aceptar métodos políticos combativos, incluidos los golpes militares, y a seguir a líderes fuertes que podrían emplear medios no democráticos.⁵ La encuesta mostró que el 39% de los hondureños convenían en que “necesitamos un líder poderoso que no necesite ser elegido”, mientras que en otros países de la muestra se registraba un promedio de solo un 16% de conformidad con esa afirmación. Mitchell Seligson y John Booth han sugerido en varias ocasiones —entre ellas un ensayo en el *Journal of Democracy* (Vol 21, N° 2 Abril 2010)— que las acciones temerarias e ilegales de los líderes de ambos bandos del golpe de 2009 se vuelven menos sorprendentes si se considera esta actitud permisiva de las personas.⁶ Asimismo, estos investigadores proporcionan información adicional, proveniente de las encuestas del Barómetro de las Américas, que muestra a Honduras como el país latinoamericano con el mayor porcentaje de ciudadanos “tres veces insatisfechos”: descontentos con las instituciones nacionales, el desempeño económico del gobierno y la democracia tal como existe en la realidad.

Jamás el Partido Nacional ni el Partido Liberal se han enfocado seriamente en la ideología o en un programa político coherente. Los dos funcionan principalmente como un vehículo para obtener favores políticos y recursos. Ambos partidos exhiben facciones personalistas que actúan en forma independiente y compiten entre ellas. A pesar de que los liberales tienen una pequeña ala progresista que el Partido Nacional no tiene, los dos son considerados de centroderecha en términos de orientación política. Hasta hace poco, Manuel “Mel” Zelaya parecía ser un típico político hondureño de carrera. Era un liberal del departamento rural de Olancho, donde su familia ha sido por generaciones un

poderoso grupo dedicado a la ganadería y la explotación forestal. En 1975 su hacienda, Los Horcones, fue escenario de una infame masacre de activistas campesinos por la que el padre de Zelaya fue condenado a prisión. Antes de llegar a la presidencia, Zelaya era dirigente de los productores madereros hondureños, en un país donde la deforestación ha provocado un gran daño. También prestó servicios como director de la asociación empresarial más importante del país, el conservador Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Luego de múltiples períodos en el Congreso Nacional y de una temporada como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el afable Zelaya, invariablemente vestido de sombrero y botas vaqueras, ganó fácilmente las primarias presidenciales del Partido Liberal en 2005.

Al igual que su adversario del Partido Nacional, el presidente del Congreso Porfirio “Pepe” Lobo, durante su campaña Zelaya elogió el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), de carácter neoliberal, y prometió mantener la tradicional alianza de Honduras con Estados Unidos. El candidato liberal se distinguió de Lobo Sosa sobre todo por ofrecer un enfoque más moderado para combatir la diseminación de las pandillas delictivas juveniles. Lobo apoyó decididamente la pena capital como parte de la solución al aumento de la delincuencia, pero Zelaya se opuso. Zelaya efectivamente colaboró con los progresistas liberales que le ayudaron a obtener una donación del venezolano Chávez para su campaña, pero varios acaudalados partidarios de la clase dirigente también contribuyeron. En la izquierda liberal, el líder hondureño creó vínculos particularmente estrechos con Patricia Rodas, hija de uno de los antiguos dirigentes políticos más famosos del partido. Rodas había abrazado el marxismo y los movimientos revolucionarios de Centroamérica en sus días de estudiante en los años ochenta, pero más tarde había moderado su postura ideológica a fin de ascender dentro del Partido Liberal.

Zelaya gira hacia la izquierda

Después de ganar por un estrecho margen, el presidente Zelaya no siguió una senda ideológica clara durante su incoherente primer año en el poder. Aumentó las oportunidades de educación para los niños pobres, pero también causó disgusto en los grupos de derechos humanos con sus severas pero infructuosas medidas en contra de la violencia pandillera. El presidente fundamentó su apoyo político en una amplia gama de facciones liberales representadas en su gabinete, e ignoró a las organizaciones populares de izquierda que más tarde le darían su apoyo. Además se ganó la reputación de ser un líder impulsivo y provocador y desarrolló una relación hostil con la mayoría de los medios de comunicación hondureños. Zelaya inició la evolución hacia la izquierda en su segundo año. A mediados de 2007, él y Patricia Rodas se

reunieron en Managua con Hugo Chávez y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para celebrar el aniversario de la revolución sandinista. Posteriormente el presidente hondureño introdujo en su gabinete a más liberales de tendencia izquierdista y continuó con el ataque en contra de las arraigadas élites económicas y políticas. Zelaya señaló a la “oligarquía” capitalista de la nación, que consistía en unas cuantas decenas de familias poderosas, como la causa de la mayor parte de las desgracias de Honduras. Defendió al movimiento sindicalista y ayudó a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), de 60.000 miembros, y a otros grupos a obtener considerables aumentos salariales. En 2008, encolerizó a sus antiguos amigos del COHEP y el sector privado al aumentar un 60% el salario mínimo, con lo que este llegó a 289 dólares estadounidenses al mes. El costo creciente de la mano de obra y un deficiente control fiscal de parte del gobierno de Zelaya contribuyeron al aumento de la inflación, que alcanzó el 10% en 2008.

Asimismo, Zelaya alineó estrechamente a Honduras con la socialista Venezuela. Chávez visitó el país a principios de 2008 para darle la bienvenida al programa Petrocaribe. Bajo este acuerdo, Venezuela permitió a Honduras financiar el 40% de sus compras de petróleo a un interés del 1% durante 25 años, lo que redujo fuertemente los costos de importación de este producto. Más tarde en ese mismo año, Zelaya y Rodas, quien pronto sería nombrada Ministra de Relaciones Exteriores, incorporaron a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) de Chávez, que suministraba millones de dólares en asistencia para el desarrollo. El sector empresarial privado recibió con beneplácito los beneficios financieros de Petrocaribe, pero se opuso duramente al ALBA, que Chávez había formado para combatir las políticas económicas neoliberales y la influencia de Estados Unidos en América Latina. Los diputados del Partido Nacional se abstuvieron en la votación sobre el ALBA en el Congreso, pero Roberto Micheletti ayudó a persuadir a la mayoría de sus camaradas liberales para que respaldaran el pacto luego de que Zelaya accediera a trabajar en contra del principal rival de Micheletti en las venideras primarias presidenciales del Partido Liberal, que se realizarían en 2008.⁷ Posteriormente empezaron a circular rumores de que el dinero venezolano estaba comprando votos para el ALBA. El matrimonio por conveniencia entre Zelaya y el derechista Micheletti, quien más tarde encabezaría el gobierno interino posgolpe, fracasó después de que este último perdiera la nominación presidencial liberal en favor del ex vicepresidente Elvin Santos.

Zelaya sabía que su giro hacia la izquierda alejaría a la clase política tradicional y a la empresa privada, pero esperaba construir un nuevo movimiento político entre la mayoría de hondureños que se habían desilusionado de las élites partidarias y las instituciones democráticas tradicionales. Zelaya, hombre alto y directo, parecía tener una buena

comunicación con los hondureños pobres, pero su nueva orientación política al comienzo no atrajo el apoyo popular que se esperaba. Las encuestas a nivel nacional de principios de 2009 registraban que las tasas de aprobación de Zelaya eran solo del orden del 30%. Algunos miembros de la izquierda temían que el liberal de 56 años de edad fuera un oportunista en lugar de un genuino, tardío converso al socialismo. Bajo Zelaya, hubo escasos signos de una reforma agraria revigorizada en favor del afligido campesinado del país, y las informaciones de soborno y malversación dentro del gobierno la hicieron parecer tan poco limpia como sus predecesoras. Además, los alegatos en torno a las irregularidades financieras de quienes habían sido designados por Zelaya en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, de propiedad del Estado, suscitaron gran cantidad de cobertura periodística negativa.

No obstante, se especuló mucho que Zelaya esperaba conseguir la reelección en 2009 o 2013 a pesar de la rigurosa prohibición constitucional respecto de un segundo período. El artículo 239 de la Constitución de Honduras convierte en un delito el perseguir o apoyar, incluso de manera indirecta, la reelección presidencial. (El artículo 42 de hecho establece que dichas acciones son motivo para perder la ciudadanía hondureña). Además, el estricto impedimento acerca de la reelección solo se puede cambiar por la vía de una asamblea constituyente. En noviembre de 2008, Zelaya inició una campaña para llamar a dicha asamblea, argumentando que el sistema de gobierno existente en el país servía únicamente a los pocos adinerados. Aunque nunca propuso ninguna reforma específica y desmintió públicamente estar actuando en beneficio propio, los analistas de todo el espectro político sospechaban que su principal interés yacía en eliminar la prohibición de reelección. Además, los conservadores creían que Zelaya planeaba seguir el precedente establecido por Chávez y algunos de sus aliados del ALBA, al utilizar una asamblea constituyente para dismantelar el control legislativo y judicial sobre el poder ejecutivo antes de aventurarse en un programa de cambio radical.

El momento decisivo

En marzo de 2009, cuando quedaban solamente 10 meses de su período presidencial, Zelaya emitió un decreto ejecutivo que ordenaba al Instituto Nacional de Estadística (INE) celebrar un referendo no vinculante para preguntar a los hondureños si deseaban agregar un ítem sobre la conveniencia de una asamblea constituyente a la papeleta de votación de las elecciones generales de noviembre. Durante los tres meses siguientes, el fiscal general —miembro del Partido Liberal—, el TSE, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (el más alto organismo judicial del país, que consta de siete miembros designados del Partido Liberal y siete del Partido Nacional) determinaron

que el referendo propuesto era ilegal e inconstitucional. De acuerdo a la ley hondureña, solo el Congreso puede llamar a un referendo y solo el TSE (no el INE) puede llevarlo a cabo. El presidente Zelaya rechazó todas estas resoluciones. Afirmó que él simplemente estaba recogiendo la opinión del pueblo hondureño acerca de este tema, y se rehusó categóricamente a reconocer la autoridad legal de cualquiera de estas instituciones para detenerlo, indicando que todas estaban bajo el control de sus adversarios políticos. La intransigencia de Zelaya ante tan firme oposición institucional hizo que los conservadores sospecharan que estaba planeando utilizar la victoria en un referendo como el fundamento para posponer las elecciones generales y ordenar la rápida convocación a una asamblea constituyente.

La crisis constitucional provocada por el enfrentamiento del Presidente con las ramas judicial y legislativa puso al Ejército hondureño en una posición difícil. Como “comandante general” de las fuerzas armadas según el artículo 277, el presidente Zelaya tenía el derecho constitucional de ordenar al Ejército que proporcionara la acostumbrada asistencia logística y de seguridad al referendo. Asimismo, Zelaya había cultivado excelentes relaciones con las fuerzas armadas desde el inicio de su período y había duplicado con creces su presupuesto.⁸ Había aumentado la visibilidad del Ejército y favorecido especialmente al oficial superior, el general Romeo Vázquez Velázquez, al nombrarlo para un poco habitual segundo período de tres años como Jefe del Estado Mayor Conjunto. No obstante, los oficiales del Ejército hondureño tienen además una obligación constitucional, según los artículos 272 y 278, de desobedecer las órdenes ilegales o inconstitucionales. Varios oficiales de alto rango también eran reacios a cumplir con un mandato de Zelaya de facilitar el referendo debido a que, habiendo sido socializados políticamente durante la Guerra Fría, detestaban su alianza con Hugo Chávez.⁹ Además, los líderes de la élite política y económica tradicional,¹⁰ entre los que estaría incluido el ex presidente liberal Carlos Flores, habían dejado de lado sus diferencias tradicionales y habían comenzado a ejercer presión sobre el Ejército para que se uniera a una conspiración destinada a destituir a Zelaya si persistía en su sondeo. Estos líderes civiles intentaban restablecer temporalmente su alianza antirrevolucionaria, del período de la Guerra Fría, con las fuerzas armadas. La embajada de Estados Unidos, que había sido parte integral de esta coalición en el pasado, no se unió a la conspiración. En cambio, el embajador Hugo Llorens y su equipo intentaron inútilmente convencer a Zelaya y a sus adversarios de hacer un trato y terminar con la crisis.

Luego de asesorarse por expertos legales civiles y militares, a fines de abril el general Vázquez aconsejó a Zelaya que debía abstenerse de dar instrucciones al Ejército para que brindara apoyo logístico al polémico referendo. Ignorando la advertencia, el día 24 de junio el Presidente ordenó a las fuerzas armadas ayudar en la votación. La colaboración

del Ejército habría fortalecido la autoridad del Presidente al demostrar que había conseguido el apoyo de los soldados. Sin embargo, el general Vásquez se negó a obedecer, después de lo cual Zelaya lo despidió. Los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del inspector general de las fuerzas armadas, renunciaron juntos, al igual que el respetado Ministro de Defensa de Zelaya, el civil Edmundo Orellana. La Corte Suprema repuso prontamente al general Vásquez en su antiguo cargo, argumentando que una ley del año 2001 por la cual se regían las fuerzas armadas impedía al Presidente remover al jefe del Ejército sin una causa legal a pesar de su aparente autoridad constitucional, según el artículo 280, para reemplazar al oficial superior “libremente”. Zelaya expresó a una multitud de animados seguidores que no reconocería el reintegro del general Vásquez.

El TSE solicitó a la Policía que confiscara las papeletas y las urnas del referendo propuesto, que luego se almacenaron en una base aérea de Tegucigalpa. El jueves 25 de junio, Zelaya respondió conduciendo personalmente a un grupo de varios cientos de partidarios hacia la base y obligando al jefe de esta a entregarle todos los materiales del referendo, hecho que hizo aún más ásperas sus relaciones con las fuerzas armadas. Citando una serie de acciones ilegales de Zelaya, la Corte Suprema no tardó en ordenar al general Vásquez que pusiera al Presidente bajo arresto, y una unidad militar de alrededor de 150 soldados detuvo a Zelaya en la mañana del domingo. El referendo, que Zelaya planeaba celebrar ese día, no se llevaría a cabo. Los soldados excedieron las instrucciones judiciales y, según el artículo 102, violaron los derechos constitucionales de Zelaya al exiliarlo en lugar de llevarlo frente a un juez, conforme a lo exigido por la ley. Un vocero del Ejército declaró que las fuerzas armadas tomaron esta medida para impedir un enfrentamiento violento con los partidarios de Zelaya. En los días previos al golpe, el Congreso Nacional también había estado indagando acerca de algún modo de expulsar a Zelaya a pesar de que, según la Constitución, esta institución carecía de un poder explícito de acusación. Luego de que el Ejército destituyera a Zelaya, circuló entre los diputados una falsa carta de renuncia, y rápidamente estos confirmaron a Micheletti como presidente interino mediante una desequilibrada votación de 122 contra 6. Una indignada comunidad internacional se unió para exigir la restitución de Zelaya. Además, la Organización de los Estados Americanos (OEA) suspendió a Honduras, y la mayoría de las naciones representadas en Tegucigalpa retiraron a sus embajadores.

Cómo se sostiene el golpe

El golpe dejó profundamente dividida a la opinión pública hondureña. Tanto los partidarios como los opositores del depuesto presidente salían continuamente a la calle por miles. La popularidad de Zelaya creció

desde el 30% de valoración positiva registrado más temprano en 2009, pero muchos hondureños seguían siendo muy críticos con respecto a él. Una encuesta de Gallup¹¹ realizada en octubre reveló que el 52% de los hondureños tenían una visión favorable de Zelaya, y las encuestas de Latinobarómetro y Greenberg Quinlan Rosner¹² mostraban que en promedio un 59% desaprobaba el golpe. Una cifra menor de hondureños, equivalente al 41%, veía a Micheletti en forma positiva. Con todo, una encuesta posterior de Gallup fue menos favorable a Zelaya, pues indicaba que un 49% de la población se oponía a su restitución y un 47% la aprobaba.¹³

Zelaya podía contar con el respaldo de los poderosos sindicatos de profesores y de las tres principales federaciones de sindicatos de la nación: la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) —vinculada a la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO)—, la socialcristiana Central General de Trabajadores (CGT) y la radical Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). Los grupos de campesinos como la Vía Campesina Centroamericana, el pequeño partido de izquierda de nombre Unificación Democrática, y varias organizaciones populares completaban su FNR. Solo una pequeña parte del Partido Liberal se mantuvo leal a Zelaya, aunque dicho segmento incluía a la familia Rosenthal y su influyente periódico *Diario Tiempo*.

La coalición anti Zelaya era mucho más formidable. Reunía casi a la totalidad de la clase política tradicional y el sector privado, la mayoría de los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, la jerarquía de la Iglesia católica y la mayor parte de la clase media. El FNR inició una serie de manifestaciones, barricadas, ocupaciones y huelgas en favor de Zelaya a lo largo del verano y el otoño, pero la Policía y el Ejército las sofocaron. Amnistía Internacional informó que el uso de una fuerza excesiva por el Ejército y la Policía dio como resultado cientos de golpizas y detenciones, así como varias muertes.¹⁴ Por su parte, el FNR señaló que las fuerzas de seguridad habían matado a más de veinte hondureños. Además, la emisora Radio Globo y otros medios de comunicación pro Zelaya enfrentaron el acoso y las clausuras periódicas. Después de dos intentos fallidos de regresar a Honduras, en septiembre Zelaya logró esquivar a las fuerzas de seguridad y comenzó a dirigir su movimiento desde dentro de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, pero fue incapaz de reunir un número suficiente de nuevos partidarios como para expulsar a Micheletti.

Dado que sus partidarios fueron incapaces de ganar la batalla en las calles, la única esperanza de Zelaya era que la coalición golpista sufriera un quiebre o que la presión internacional a su favor se hiciera irrefrenable, y luego esta última ayudara quizás a los primeros. La suspensión de decenas de millones de dólares de ayuda económica provenientes de la Unión Europea, Estados Unidos y el Banco Mundial perjudicó a

una economía que ya flaqueaba en medio de una recesión mundial. La inversión y el turismo se interrumpieron y más de 180.000 hondureños perdieron su trabajo.¹⁵ El colapso económico impulsó la negociación y quizás hizo que algunos dirigentes empresariales hondureños cambiaran de parecer respecto del golpe, pero la situación económica en deterioro nunca dividió a la coalición anti Zelaya.

El gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó inmediatamente el golpe que había tratado de evitar y, como la OEA, apoyó la iniciativa del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, de negociar una solución a la crisis. Arias no tuvo éxito, y en septiembre Estados Unidos intensificó la presión sobre Micheletti al suspender prácticamente toda ayuda no humanitaria y al cancelar las visas de los principales miembros y partidarios del gobierno interino. No obstante, Estados Unidos nunca empleó su mayor arma, las sanciones comerciales, y finalmente titubeó en su compromiso con Zelaya. A fines de octubre, una delegación de alto nivel estadounidense persuadió a Micheletti y Zelaya a firmar el Acuerdo Tegucigalpa-San José, cuyo compromiso era crear un gobierno de unidad y restituir a Zelaya luego de una votación favorable del Congreso hondureño. El gobierno de Obama elogió el acuerdo, pero no tomó ninguna acción luego de su rápido fracaso. De hecho, el entonces Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Thomas Shannon, indignó a los partidarios de Zelaya cuando anunció que su país reconocería las elecciones de noviembre aun cuando los diputados del Congreso no votaran en favor del reintegro de Zelaya a su cargo. El Congreso hondureño pospuso su decisión hasta después de las elecciones y luego rechazó la restitución de Zelaya por un arrollador margen de 111 contra 14.

La oposición al gobierno de Micheletti, tanto desde el extranjero como desde el propio país, tampoco causó una desunión seria en las fuerzas armadas. Zelaya afirmó que contaba con un apoyo significativo dentro del Ejército, especialmente en los niveles medio y bajo del cuerpo de oficiales. Después del golpe, varias fuentes noticiosas de izquierda señalaron que las fuerzas armadas estaban profundamente divididas, y en agosto, el jefe del equipo negociador del depuesto presidente, Víctor Meza, declaró al diario mexicano *La Jornada* que el alto mando aún podía cambiar de bando y que un grupo de oficiales pro Zelaya podían tomar el control de las fuerzas armadas.¹⁶ En septiembre, *The Economist* informó de un apoyo militar “vacilante” a Micheletti luego de que se especulara que Zelaya no podría haber regresado secretamente a Honduras sin ayuda de personal del Ejército.¹⁷ Sin embargo, las fuerzas armadas permanecieron unidas en su respaldo al gobierno interino. Quizás el número de oficiales pro Zelaya fue siempre menor que lo estimado por él, o sus potenciales aliados militares pudieron haber sido cooptados o intimidados por oficiales que respaldaban el golpe.

Las elecciones de noviembre de 2009 se realizaron conforme a lo programado. El resultado fue una victoria aplastante para el acaudalado terrateniente de Olancho, Porfirio Lobo, y para el Partido Nacional. Lobo obtuvo el 57% de la votación presidencial mientras que su partido conquistó la mayoría del Congreso con 71 asientos. El candidato presidencial liberal Elvin Santos, un conservador que había tenido frecuentes conflictos con Zelaya, reunió sólo el 38% de los votos. Los divididos liberales vieron reducirse el número de sus escaños en el Congreso de 62 a 45. Tres partidos menores, incluida la Unificación Democrática, partidaria de Zelaya, se repartieron la docena de asientos restantes. El TSE anunció una estimación sospechosamente alta de un 62% de participación electoral en la noche de la elección, cuando los medios de comunicación internacionales estaban más atentos, pero más tarde informó oficialmente que el 49,9% de los votantes registrados habían acudido a las urnas. Este resultado representaba una disminución desde el 55% que había votado en 2005, pero indicaba que el llamado de Zelaya a un boicot no había tenido el efecto esperado. Hubo denuncias de compra de votos en zonas pobres e intimidación por parte de los empleadores,¹⁸ pero las encuestas indicaban que la mayoría de los votantes hondureños concurrieron a las urnas con la esperanza de brindar a la nación un nuevo comienzo después de tantos meses de agitación política. Las amenazas del gobierno de Micheletti de procesar a quienes no votaran no eran muy creíbles, a pesar de que, estrictamente, votar es obligatorio en Honduras. El FNR declaró que las cifras finales de participación en las urnas estaban infladas, mientras que los defensores del gobierno afirmaban que la tasa real de abstención era menor que la informada, pues los nombres de varios miles de hondureños que vivían en el extranjero aún estaban incluidos en los registros electorales. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó satisfacción con las elecciones a pesar de sus deficiencias, y varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, apoyaron el resultado. El 27 de enero de 2010, Lobo, de 62 años de edad, prestó juramento para iniciar su período de cuatro años.

Nubes de incertidumbre

Honduras logró grandes avances democráticos a partir de la década de 1980. Cuatro elecciones, cada una seguida de un traspaso ordenado del poder, revelan la institucionalización del proceso electoral. Las fuerzas armadas, alguna vez todopoderosas, retornaron a sus cuarteles y perdieron su antigua influencia en la política. No obstante, el golpe de junio de 2009 proyectó una intensa luz en cuyo resplandor queda completamente al descubierto la real fragilidad de estos logros. Cuando el presidente Zelaya giró abruptamente hacia la izquierda y desafió la autoridad de la Corte Suprema, el TSE y el Congreso Nacional,

sus adversarios sintieron que estaba justificado utilizar en su contra cualquier medio disponible. Temerosos de que Zelaya persiguiera un segundo período —inconstitucional—, convencieron a las fuerzas armadas de separar al Presidente del cargo para el que había sido elegido democráticamente. Ni la condena internacional ni las protestas internas podían forzar su restitución.

A pesar de los traspasos electorales pacíficos, claramente la democracia no es la única opción disponible en Tegucigalpa. Los políticos de ambos bandos del golpe de 2009 han demostrado lo dispuestos que están a ignorar las reglas democráticas y emplear la fuerza en caso de ser necesario. Asimismo, la politización de los tribunales y las autoridades electorales de la nación significa que no hay instituciones independientes de la estatura que se requiere para contribuir a resolver las crisis políticas de manera pacífica y conforme a la ley. Los líderes hondureños también parecen haber perdido, al menos temporalmente, el talento para los arreglos políticos que exhibieron a menudo en el pasado. La política hondureña podría volver a la normalidad en muchos aspectos durante 2010, pero pasará mucho tiempo antes de que las élites políticas civiles que compiten entre sí confíen en las normas democráticas en épocas de conflictos graves.

Honduras deberá también hacer frente a un Ejército repolitizado, aunque este problema debería ser manejable. En 2009, el Ejército actuó más por presión que por propia iniciativa: intervino debido al colapso de la política democrática civil, no con la intención de recobrar su anterior predominio. Las fuerzas armadas fueron cruciales para el derrocamiento de Zelaya y para la capacidad del gobierno interino de mantenerse después en el poder. Si el Ejército no hubiera accedido a destituir a Zelaya en junio o si posteriormente se hubiera dividido en facciones rivales, el resultado podría haber sido completamente diferente. Podría haber sido Micheletti en lugar de Zelaya quien se hubiera visto obligado a vivir en forma incómoda durante meses en una embajada extranjera. Los oficiales militares hondureños reconocen lo importantes que fueron para la coalición anti Zelaya, y las fuerzas armadas pueden ahora anticipar una mayor atención para sus intereses. Los oficiales militares de alto rango que desempeñaron un papel decisivo en los recientes acontecimientos pueden esperar ser recompensados de manera individual. Sin embargo, el pequeño Ejército hondureño de 12.000 soldados no ha recuperado en absoluto el poder que ostentó en el pasado. Manuel Zelaya y Hugo Chávez suscitaron nuevos temores de revolución entre las privilegiadas élites políticas y económicas de la nación, que una vez más golpearon la puerta de los cuarteles, pero la izquierda plantea una amenaza mucho más débil ahora que su líder ya no cuenta con los poderes presidenciales. Las élites civiles tradicionales prestarán cuidadosa atención a las fuerzas armadas como un aliado que podrían necesitar una vez más, pero no se someterán a la dirección del Ejército. Además, las fuerzas

armadas carecen del firme respaldo de Estados Unidos, que las ayudó a dominar la política hondureña en los años ochenta. Por otra parte, Lobo debiera ser capaz de reafirmar el control presidencial sobre el Ejército sin gran dificultad.

A fin de recuperar la aprobación y la ayuda financiera internacional, el presidente Lobo inició un diálogo de reconciliación nacional abierto a todos en las semanas anteriores a su investidura. También negoció un salvoconducto a favor de Zelaya para viajar a República Dominicana y designó un gabinete políticamente diverso y de unidad nacional que incluye a partidarios de Zelaya en los ministerios menores de Educación y Reforma Agraria. El nuevo Congreso, controlado por el Partido Nacional, aprobó una amnistía política general, y la Corte Suprema de Justicia exoneró al alto mando del Ejército de exiliar a Zelaya. El discurso inaugural de Lobo también sugería que durante los próximos meses podría mostrar un mayor interés en las reformas de lo que sus críticos del FNR esperan. No obstante, la perspectiva a largo plazo para el nuevo gobierno es menos prometedora. El historial político de derecha del presidente Lobo y los conservadores que designó en los puestos más altos del gabinete, sobre todo el radical ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, no constituyen un buen presagio. Las verdaderas intenciones del gobierno deberían aclararse una vez que la atención internacional se haya desviado de Honduras.

El papel que el FNR desempeñe en el futuro sigue siendo desconocido. El movimiento no consiguió restituir a Zelaya, pero sí movilizó a muchos de quienes están descontentos con la democracia al estilo hondureño en ambos partidos tradicionales. Si puede evitar los destructivos conflictos que tradicionalmente han debilitado a la izquierda hondureña y conservar el ímpetu ahora que la lucha para reinstalar a Zelaya terminó, el movimiento podría convertirse en un importante nuevo factor de la política hondureña. El futuro de Manuel Zelaya también es incierto. Prometió volver nuevamente del exilio para dirigir el FNR, pero hay cargos de corrupción pendientes en su contra que no están incluidos en la amnistía, por lo que su regreso es poco probable en el futuro cercano.

La desilusión del pueblo hondureño con el estado de la gobernabilidad bajo la democracia tal como existe en la realidad antecede largamente el golpe de 2009. Una de las principales razones de por qué la democracia nunca se ha consolidado en Honduras es el fracaso de las élites políticas civiles en conseguir el apoyo incondicional de la gran mayoría de las personas a las instituciones democráticas. En lugar de dirigir sus esfuerzos hacia mejorar la suerte de una de las cuatro poblaciones más pobres de América Latina, la clase política tradicional de Honduras dedica la mayor parte de su tiempo y energía a intentar atrapar, de manera legítima o no, algo del botín que suponen los cargos públicos. Los delitos callejeros no han disminuido, y los traficantes de cocaína

están ampliando su influencia. Según las encuestas de Latinobarómetro, la proporción de hondureños que manifestaron una preferencia por la democracia se elevó desde un 44% a un 55% después del golpe, pero conseguir apoyo y legitimidad duraderos para la democracia requerirá que quienes sean elegidos realicen progresos concretos en la vida de los hondureños comunes. Si el nuevo Jefe de Estado no hace más que reconocer superficialmente la necesidad de atacar la pobreza y la desigualdad, y la importancia de sancionar la corrupción, el apoyo popular a la política democrática probablemente seguirá disminuyendo.

NOTAS

El autor desea agradecer a John Booth, Orlando Pérez y Billy Peña por sus comentarios a una versión anterior de este ensayo.

1. El alto mando del Ejército ecuatoriano no planeó ni llevó a cabo el golpe que depuso al presidente Jamil Mahuad en 2000. El líder civil ecuatoriano fue derrocado por oficiales disidentes encabezados por el coronel Lucio Gutiérrez y grupos indígenas opositores. Posteriormente, la dirección del Ejército asumió el control y encarceló a Gutiérrez.

2. Véase la encuesta de Latinobarómetro del año 2009 en www.latinobarometro.org. Todos los datos de Latinobarómetro de los años 2008 y 2009 citados en el presente ensayo se pueden encontrar en este sitio web.

3. Véase un panorama general de la historia política hondureña en J. Mark Ruhl, "Honduras: Militarism and Democratization in Troubled Waters", en Thomas W. Walker y Ariel C. Armony, eds., *Repression, Resistance, and Democratic Transition in Central America* (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 2000), 47-66.

4. Kenneth M. Coleman y José René Argueta, *Political Culture, Governance and Democracy in Honduras, 2008* (Nashville, Tenn.: Latin American Public Opinion Project (LAPOP), 2008), 128, 136-137.

5. Información proveniente de investigación mediante encuestas, citada en John A. Booth, Christine J. Wade y Thomas A. Walker, *Understanding Central America* (Boulder, Colo.: Westview, 2009), 192.

6. Mitchell A. Seligson y John A. Booth, "Predicting Coups? Democratic Vulnerabilities, the AmericasBarometer and the 2009 Honduran Crisis", *Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Insight Series* (2009). Disponible en www.americasbarometer.org.

7. Ismael Moreno, "Ya en el ALBA y siempre en la impunidad", *Envío*, septiembre de 2008.

8. Alejandro Fernández, "Otro mes bajo el golpe de Estado: 'Oigo un ruido que suena...'", *Envío*, septiembre de 2009.

9. Carlos Dada y José Luis Sanz, "Cometimos un delito al sacar a Zelaya, pero había que hacerlo", *El Faro* (Tegucigalpa), 2 de julio de 2009. Disponible en www.elfaro.net.

10. Leticia Salomón, "Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado", *Envío*, julio de 2009.

11. Encuesta de Gallup citada en Juan Zamorano, "Honduras' Interim Leader Calls for Ending Talks", *Miami Herald*, 27 de octubre de 2009.

12. Encuesta de Greenberg Quinlan Rosner Research, octubre de 2009. Disponible en www.greenbergresearch.com.

13. Información citada en “Zelaya’s Scrap of Paper”, *The Economist*, 5 de noviembre de 2009.

14. Amnistía Internacional, “Honduras: amenaza de crisis de derechos humanos, mientras la represión se intensifica”, agosto de 2009.

15. Estimación de puestos de trabajo perdidos realizada en “Honduras’ Business Leaders Hope Elections Restore Investors’ Faith” *Miami Herald*, 25 de diciembre de 2009.

16. Arturo Cano, “Se cocina en Washington una negociación al margen de Óscar Arias: ministro de Zelaya”, *La Jornada* (México, D.F.), 7 de agosto de 2009.

17. “Zelaya Swaps Exile for Embassy”, *The Economist*, 24 de septiembre de 2009.

18. Ismael Moreno, “Un ‘arrollador’ triunfo electoral y una derrota nacional”, *Envío*, diciembre de 2009, 39-40.